

COLECCIÓN MONOGRAFÍAS

N° 14

La "Guerra del Gas". Representaciones sobre neoliberalismo y defensa de los recursos naturales en la crisis política de octubre de 2003 en Bolivia

Jimena Costa Benavides

PROGRAMA GLOBALIZACIÓN, CULTURA Y
TRANSFORMACIONES SOCIALES
(www.globalcult.org.ve)

CENTRO DE INVESTIGACIONES POSTDOCTORALES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

www.globalcult.org.ve/monografias.htm

© Jimena Costa Benavides, 2004.
Responsable de la edición: Daniel Mato (dmato@reacciun.ve)
Diseño de la carátula: Alejandro Maldonado (alemal_f@hotmail.com)
Corrección: José Manuel Esteves y Alejandro Maldonado
Impresión: Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales
Reproducción: Copy Trébol, C.A.

ISBN de la colección: 980-12-1101-6
ISBN de esta monografía: 980-12-1110-5
Hecho el depósito legal: lf25220043202191

Primera edición (Caracas, mayo de 2004)
Impreso en Venezuela – Printed in Venezuela

Se autoriza la reproducción total y parcial de esta monografía siempre y cuando se haga con fines no comerciales y se cite la fuente según las convenciones establecidas al respecto, previa notificación a la institución editora. Del mismo modo y en las mismas condiciones se autoriza también la descarga del respectivo archivo en nuestra página en Internet:

<http://www.globalcult.org.ve/monografias.htm> . Con el propósito de facilitar la cita, en la primera página se han incluido los datos completos de la monografía. En caso de incluirse este texto en libros impresos (se entiende que con fines no comerciales) agradecemos se nos hagan llegar al menos dos (02) ejemplares de la publicación respectiva a: Daniel Mato (coordinador), Apartado Postal 88.551, Caracas – 1080, Venezuela. En caso de incluirse algunos archivos de nuestra página en Internet en otros espacios semejantes, agradecemos se nos informe al respecto a través de nuestra dirección electrónica: globcult@reacciun.ve

La responsabilidad por las opiniones expresadas en este trabajo incumbe exclusivamente al autor o autora firmante y su publicación no necesariamente refleja el punto de vista de la institución editora.

La “Guerra del Gas”. Representaciones sobre neoliberalismo y defensa de los recursos naturales en la crisis política de octubre de 2003 en Bolivia*

Jimena Costa Benavides

“No queremos que se exporte el gas natural, que perfectamente se puede industrializar en Bolivia. Y venderlo al país que queramos, pero no a Estados Unidos, que hoy ocupa Irak y mañana puede hacer lo mismo en Bolivia”. (Felipe Quispe, octubre de 2003).

Introducción.-

Este es un análisis comparativo de las múltiples representaciones sobre *neoliberalismo* y sobre el rol del Estado en la defensa de los recursos naturales en la crisis política de octubre de 2003 en Bolivia, denominada la “Guerra del Gas”. El objetivo es mostrar que las contradicciones entre esas representaciones son uno de los factores que producen y profundizan la crisis de legitimidad de la democracia boliviana.

El análisis se realizará a partir de los discursos de los dirigentes de las principales organizaciones políticas que participaron activamente en la mencionada coyuntura: Evo Morales Diputado Nacional, Jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y principal dirigente del movimiento de productores de la hoja de coca del Chapare boliviano; Felipe Quispe Diputado Nacional, Jefe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) y Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); y Jaime Solares Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).

Las representaciones de neoliberalismo y del rol del Estado que manifiestan estos dirigentes en sus discursos serán contrastadas con las del Presidente de la República Gonzalo Sánchez y

* COSTA BENAVIDES, Jimena (2004). *La “Guerra del Gas”. Representaciones sobre neoliberalismo y defensa de los recursos naturales en la crisis política de octubre de 2003 en Bolivia*. Colección Monografías, N° 14. Caracas: Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela. 40 págs. Disponible en <http://www.globalcult.org.ve/monografias.htm>

las del Plan de Gobierno presentado por su partido el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para las elecciones presidenciales de 2002. El MNR es el más antiguo de los partidos políticos del sistema boliviano y en sus gestiones gubernamentales se aplicaron las reformas neoliberales de primera y segunda generación, lo que no implica que este partido sea el exclusivo promotor del neoliberalismo en Bolivia, el gobierno de Jaime Paz Zamora del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) -1989 a 1993-; y el de Hugo Banzer Suárez de Acción Democrática Nacionalista (ADN) -1997 a 2002- también continuaron y profundizaron las mencionadas reformas.

Debe tomarse en cuenta que el régimen democrático en una sociedad pluricultural como la boliviana tiene características muy complejas por su heterogeneidad y que en este tipo de contexto, los procesos políticos e ideológicos deben comprenderse a partir de un patrón histórico asentado en una sociedad pluriétnica, multilingüe y fragmentada con al menos tres tipos de fuentes socio-históricas: relaciones de orden intercultural, ínter social e interregional (redes de relaciones entre diversas culturas, sistemas de estratificación de clase y articulaciones en y entre las sociedades regionales o locales y el Estado central); la convivencia de distintos tiempos históricos y culturales que parten del mundo andino pre-colonial y se complejizan a lo largo de la historia; y las relaciones con el mundo externo, con otros Estados y organismos internacionales que influyen sobre los procesos internos. (Calderón y Laserna, 1994).

Ahora bien, la “Guerra del Gas” fue una lucha por lograr que la democracia representativa sea más participativa, por lo que debe ser entendida como una lucha por la redefinición del sistema político, de sus prácticas, y de la concepción de ciudadanía. Expresa una propuesta alternativa al patrón de poder mundial que promueve e impone la difusión y expansión del modelo de ingeniería política, social y económica denominado “modelo neoliberal”, visión que presenta al Estado con un papel limitado y promueve un libre mercado que se considera eficiente, o al menos con menos fallas. Por ello, el debilitamiento del Estado-Nación y la redefinición de las relaciones entre los ámbitos “público” y “privado” se hace vital.

La visión neoliberal presenta al Estado democrático con un papel limitado bajo el supuesto de que la obligación de la autoridad política no es perseguir sus propios intereses sino promover - a través del imperio de la ley- las condiciones de seguridad colectiva, de orden público y la provisión de un número limitado de bienes públicos eficientemente administrados por el mercado, las pretensiones re-distributivas de los actores sociales son consideradas ilegítimas y las desigualdades no justifican un intervencionismo corrector. Esta visión viene acompañada del debilitamiento del Estado, pero el “achicamiento” del mismo se produce en las instituciones y estructuras que le permiten funcionar, no sucede lo mismo con el imaginario político de la sociedad, para el cuál, el Estado sigue teniendo un rol central en la vida nacional y cuya imagen no se ha minimizado, por lo que en momentos de crisis –como la de octubre de 2003- se pone en evidencia la existencia de proyectos de “recuperación” del Estado en el imaginario político, del Estado-nación, de aquel que cohesiona la vida social, del Estado que es responsable de las metas colectivas y no solo de “regular” el ámbito privado.

I. El origen de la crisis de octubre en Bolivia.

Como toda crisis política que acumula un abanico de múltiples contradicciones la crisis de octubre en Bolivia tiene un origen multicausal, pero considero que son tres los factores principales que contribuyen a su gestación: 1) la existencia de al menos dos visiones acerca del Estado en el imaginario político boliviano: la que fue difundida y heredada desde la Revolución Nacional de 1952 y la que se promueve a partir de las reformas neoliberales; 2) la existencia de dos visiones diferenciadas de aquello que se entiende por democracia: una visión de democracia representativa con legitimación del proceso político a través del voto y otra visión de democracia participativa con legitimación del proceso político a través de la participación directa de la sociedad con lógica assembleísta; y 3) la asociación del modelo político de democracia representativa con el modelo económico neoliberal desde el inicio del proceso democrático boliviano. Estos tres factores contribuyen a ampliar la brecha entre sociedad y sistema político debido a que no existe intersubjetividad entre ambas, es decir que las dos instancias no comparten subjetivamente un mismo significado respecto al Estado, la democracia y el neoliberalismo, lo cuál contribuye a profundizar la crisis de legitimidad,

credibilidad y representatividad del sistema político, especialmente de su sistema de partidos. Veamos cada uno de éstos factores.

1. La concepción de “Estado” a partir de 1952.

Durante el periodo democrático y hasta el presente, el imaginario político enfrenta dos visiones contradictorias respecto al Estado: una -muy difundida- basada en una *estatalatría* de los actores sociales que ven al Estado con la obligación de atender y resolver todos los problemas públicos -y aún privados-, producto de la imagen de Estado que se difunde con la Revolución Nacional de 1952; otra -menos extendida- que ve al Estado como Estado regulador-normador que delega responsabilidades al sector privado, distante de la sociedad y que se rige de acuerdo a las “recomendaciones” de los organismos internacionales, o sea el Estado del modelo neoliberal.

Esta última visión, entra en absoluta contradicción con la idea de Estado que se promueve en Bolivia a partir de la Revolución de 1952 que implementó reformas políticas vitales con efectos centrales sobre el imaginario político y sobre las representaciones sociales acerca del rol del Estado. El primer gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (1952-1956) como vanguardia de la triunfante revolución, estableció el monopolio en la exportación del estaño, alentó la política petrolera, recuperó el control sobre la explotación y la exportación de productos y recursos naturales, promovió la diversificación económica, la vertebración del país con la construcción de carreteras, la inversión pública en el oriente del país –hasta entonces concentrada en la zona andina-, la industrialización, la producción de petróleo, apostó al fomento del sector agrícola e implementó medidas estructurales como las que se describen a continuación.

- El decreto del **Voto Universal** del 21 de julio de 1952, con el que se rompió la democracia excluyente y el voto calificado haciendo elegible a cualquier mayor de edad. La ampliación de la participación y el ejercicio de la ciudadanía política fueron de impacto central en el imaginario colectivo, no solamente en términos de ampliación del número de electores, sino por que se le daba a los excluidos la decisión de quienes iban a ser sus

gobernantes y ese fue un cambio de fondo. Un ejemplo de ello, es que en las elecciones generales de 1951 hubieron apenas 126.123 votos emitidos sobre una población total de 3.019.000, sin embargo tres años después y con el Voto Universal en 1954 participaron 960.000 electores.

- El decreto de **Nacionalización de las Minas** del 31 de octubre de 1952, a través del cual el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado, el objetivo era tomar el control total de la economía y descabezar a los grandes mineros del estaño, para que el Estado vuelva a ser dueño de sus recursos naturales y administrarlos para desarrollar el país.
- El decreto de **Reforma Agraria** de Agosto de 1953, que devolvió la tierra a los campesinos e incorporó a casi 2.000.000 de personas en la economía interna. Se procedió a la parcelación de tierras, distribuyéndose grandes extensiones entre los indígenas en el transcurso de los siguientes años.
- En 1955 se dictó un nuevo **Código de Educación** que la hizo universal y obligatoria, con instalación de núcleos escolares rurales para los campesinos.

El gobierno revolucionario aprobó un nuevo Código del Petróleo, el Código de Seguridad Social y la Ley de Cooperativas y en 1961 una nueva Constitución Política del Estado que incluyó las minas nacionalizadas como patrimonio del Estado, reconoció el voto universal y las milicias populares y estableció la reelección. En 1962 se estableció el primer plan que planteaba el desarrollo del país en el largo plazo y establecía la premisa de lucha contra la pobreza, en la lógica del desarrollismo y bajo planificación estatal.

Las reformas políticas fueron acompañadas por el movimiento obrero con la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB) en abril de 1952 y con la creación de milicias mineras y campesinas que apoyaban fielmente la revolución, es decir, que éstos sectores fueron activos participantes del proceso político. El MNR reorganizó sus fuerzas uniéndose plenamente a los mineros y a la COB que terminó nombrando tres ministros obreros para el nuevo gobierno

(Juan Lechín, Germán Butrón y Ñuflo Chávez Ortiz). Los campesinos comenzaron a organizar sindicatos campesinos con el estímulo de la COB.

Desde ese periodo, el Nacionalismo Revolucionario (NR) fue el ideologuema dominante y articulador del proceso ideológico boliviano hasta 1979 (Antezana, 1983: 60), que hizo que el eje de legitimación del poder del Estado y del gobierno se de a partir de la articulación con alguno de los actores sociales fundamentales, incluso durante los gobiernos militares posteriores a la revolución (1964-1982): durante los gobiernos revolucionarios la base social fueron mineros y obreros, durante las dictaduras militares fue el pacto militar-campesino. Bajo la influencia del NR la gestión gubernamental era legitimada con la participación directa del algún sector popular en el gobierno y no solo a través del voto.

Con las reformas neoliberales y la consolidación del modelo democrático representativo, la legitimación de los gobiernos se produce a partir de elecciones democráticas con un ejercicio se ciudadanía política que se resume en el derecho a elegir y a ser elegido, pero no a partir de la participación de los actores sociales en la gestión gubernamental. La marca del NR hizo que en cada elección y ante la ausencia de mayorías absolutas en el comportamiento del voto, muchos sectores sociales se resistían a legitimar al partido ganador de las elecciones, es decir que el “ganar” la elección nunca garantizó el consenso mayoritario de la población.

2. El proceso democrático boliviano y el sentido de “democracia”.

Los cambios en el modelo estatista se producen a partir del periodo de continuidad democrática iniciado en 1982 y consolidado en 1985 (1). Desde entonces rige la democracia representativa como democracia pactada que ha posibilitado la estabilidad del régimen y la implementación de diversas y trascendentales reformas políticas que le dan nuevas características al funcionamiento del sistema político. Pero hasta la reforma constitucional de 2004 –efecto de la crisis de octubre-, la democracia boliviana tenía monopolio de representación para los partidos políticos y los ciudadanos sólo podían acceder a cargos de decisión a través de ellos, de modo que se creó una seria dependencia de las organizaciones

sociales hacia un sistema de partidos que no representa la heterogeneidad de la composición social boliviana.

Las últimas encuestas de percepción política muestran un escenario de crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad de los partidos políticos –oficialistas y opositores-, y las organizaciones sociales que cumplían funciones de mediación política se han debilitado y fragmentado, se han separado de los gobiernos y han dejado de legitimarlos. En veinte años de democracia los partidos políticos no han logrado representar la pluralidad al interior del sistema. Aunque tampoco ningún actor de la sociedad ha podido lograr esa representación y articulación fuera del Parlamento.

La ausencia de mayorías absolutas en el comportamiento del voto debido a la pluriculturalidad y fragmentación de la sociedad boliviana, llevó al sistema político a depender de la conformación de alianzas en el Congreso para la designación del gobierno con la mayoría absoluta, la denominada democracia pactada. Ese rasgo llevó a una forma de elección indirecta del presidente que produjo una articulación entre gobierno y parlamento, que en una primera fase funcionó a partir de mayorías absolutas (1985-1997) y posibilitó las reformas políticas e institucionales; y que en una segunda fase funcionó a partir de la captura oficialista de los dos tercios (1997-2003) y debilitó la separación y el equilibrio de los poderes públicos, atenuó el rol de fiscalización del Congreso sobre el gobierno, y posibilitó el incremento de la corrupción política, el mal uso de los escasos recursos públicos y amplió la brecha entre ciudadanos y representantes hasta llegar a una crisis generalizada en el mes de octubre de 2003.

Ahora bien, desde el periodo de lucha y resistencia a las dictaduras militares (1964-1982) existían al menos dos representaciones sociales de “democracia” en el imaginario político: la de la élite político-partidaria que postulaba la democracia representativa con delegación de soberanía popular a representantes elegidos de manera regular a través de elecciones transparentes; y la de las organizaciones políticas de la sociedad que postulaban una democracia participativa y directa de lógica asambleísta, que promueva la justicia social, redistribución de ingresos y solución a todos los problemas nacionales desde el Estado.

La ausencia de intersubjetividad entre ambas percepciones –sistema político/sociedad- nunca ha sido resuelta y la democracia representativa institucionalizada durante más de dos décadas no corresponde a la percepción de democracia del conjunto de la sociedad sino a la de la élite política, por lo que muchos sectores sociales y corporativos esperan del modelo político más soluciones de las que puede dar, es decir, no asumen que la democracia por si misma no resuelve la dependencia de recursos externos, la debilidad de la industria interna, la falta de competitividad, la ausencia de cultura política democrática, la discriminación, el racismo y los regionalismos.

En este contexto, para la consolidación de la visión de democracia representativa en Bolivia fue fundamental la influencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los procesos políticos internos, organismos que deben ser entendidos como actores sociales específicos, con intereses concretos, objetivos claros, que establecen relaciones de poder, que mantienen articulaciones de tipo global-local e intervienen organizaciones e instituciones en un contexto de relaciones sociales, políticas y económicas atravesadas por desiguales relaciones de poder y conflictos de intereses y representaciones de la experiencia (Mato, 2001: 352).

Para analizar la influencia de los organismos internacionales como el BM, el FMI y el BID en los procesos de globalización y en la articulaciones global-local, es fundamental pensar la globalización a partir de aspectos culturales que consisten en flujos de bienes y mensajes relativamente autónomos generados por actores sociales específicos, con intereses específicos y objetivos claros (Mato, 2001), que se vinculan a las prácticas, las instituciones, los discursos y los procesos internos, aspectos que se pueden percibir al analizar la influencia del FMI, del BM, del BID sobre los gobiernos bolivianos para la definición de políticas públicas neoliberales.

En el actual periodo histórico, las representaciones sociales son producidas en el contexto de procesos sociales transnacionales y su producción involucra tanto a actores locales como transnacionales que se vinculan entre sí en relaciones multidimensionales -culturales, económicas y políticas-, en los actuales tiempos de globalización la producción social de

representaciones sociales está marcada por relaciones transnacionales entre actores sociales específicos e identificables (Mato, 2003). El concepto de “complejos transnacionales de producción cultural” (Mato, 2004) pone de relieve que la manera más provechosa de acercarnos al análisis de las articulaciones transnacionales de tipos global-local y local-local es estudiando las formas en que actores individuales e institucionales se vinculan, las formas en que los actores producen discursos y procesos y cómo éstos condicionan las prácticas de los actores.

De acuerdo a Mato (2001) la cultura debe ser pensada como los aspectos simbólico-sociales de todas las prácticas humanas, con la producción de representaciones sociales que constituyen actores, contribuyen al diseño de políticas y programas de acción de esos actores y para analizar la realidad en su complejidad, reconocer las dimensiones: cultural, social, económica y política, debemos tomar en cuenta que éstas dimensiones están relacionadas y que la difusión de bienes culturales, la organización de la vida económica, el modelo de régimen político democrático-representativo y de economía de libre mercado también son fenómenos culturales porque implican sistemas de representaciones simbólicas que los hacen posibles. El BM, el FMI y el BID son agentes sociales, políticos y económicos concretos que intervienen en espacios sociales específicos, imponen relaciones y exigencias de acuerdo a sus expectativas y las sustentan en relaciones de dependencia financiera, de apoyo político y de la difusión de un discurso que tiene como meta final *el desarrollo*, el imaginario capitalista donde todos cuentan con *calidad de vida* en condición de ciudadanos iguales ante el Estado. Pero existen diferencias de fondo entre dichos organismos y los países de América Latina. Primero las relaciones no se establecen en condiciones de igualdad entre estos organismos y los Estados, el FMI “sugiere” decisiones de políticas a cambio de apoyo financiero para que los países “en vías de desarrollo” puedan combatir su déficit fiscal y “activar” economías que enfrentan serias crisis debido a las también desiguales condiciones de intercambio con el mercado mundial, por las limitaciones tecnológicas, por la estrechez de sus mercados y porque no todos los ciudadanos son consumidores, ni siquiera todos los pobladores son ciudadanos.

La intervención de los mencionados organismos internacionales -BM, FMI, BID-, en el nivel nacional produce cambios, nuevos sentidos y representaciones, estimulan ciertos modos de

auto-representación, de vida, de organización, se organizan y sostienen por interés mutuo en torno a la producción y reproducción de ciertos tipos específicos de representaciones sociales y su producción involucra tanto a actores locales como transnacionales. El eje de articulación hegemónica de esta intervención gira alrededor del modelo de democracia representativa con economía de libre mercado, es ese nuevo sentido en busca de su hegemonía.

Las representaciones sociales son pues, producidas en el contexto de procesos sociales transnacionales y su producción involucra tanto a actores locales como transnacionales que se vinculan entre sí en relaciones multidimensionales -culturales, económicas y políticas-, por ello, es fundamental tomar en cuenta la influencia de éstos actores externos sobre los procesos internos en la generación de la crisis política boliviana. Y esas representaciones sociales expresan aspectos simbólico-sociales de las prácticas humanas, constituyen actores y contribuyen al diseño de políticas. El régimen político democrático-representativo y la economía de libre mercado son también fenómenos culturales que implican sistemas de representaciones que los hacen posibles (Costa, 2003). La implementación de las “recomendaciones” de dichos organismos en el caso boliviano ha llevado a una ampliación de la brecha entre sociedad y Estado, a una transformación del Estado, por lo que el factor de cohesión social que este representaba se debilita y produce una mayor fragmentación en la ya heterogénea sociedad boliviana, que gradualmente pierde la visión de totalidad y por tanto también se debilita.

3. La asociación de “democracia” con “neoliberalismo” en el imaginario político.

El tercer factor que genera la crisis es la asociación del régimen democrático con el modelo neoliberal, que se inicia con el primer gobierno de democracia pactada, con el Pacto por la Democracia establecido entre MNR y ADN entre 1985 y 1989, que aplicó las reformas de primera generación (2) y dio paso a la economía de libre mercado en un momento en que la economía boliviana estaba en una crítica situación con cuatro años de crecimiento negativo, un alto déficit fiscal, endeudamiento externo y un proceso hiperinflacionario que llegó al 11.495%. Este fue el cuarto gobierno del histórico líder movimientista Víctor Paz Estensoro y

la situación en la que se inició el periodo era caótica: hiperinflación con ingobernabilidad, a lo que se sumó el impacto de un ambiente mundial inestable que afectó adversamente al país con altas tasas de interés internacionales, resistencia a otorgar créditos a países altamente endeudados, y la caída del precio internacional del estaño.

El gobierno se posesionó el 6 de agosto de 1985 y el principal instrumento de las políticas neoliberales o “Nueva Política Económica” (NPE) -el Decreto Supremo 21060- se promulgó el 29 de agosto de 1985, es decir, que precisamente en el momento en que se consolida el régimen democrático con la primera elección “regular” después de dos décadas de dictaduras militares, se implementa también el cambio hacia el modelo neoliberal, de modo que en el imaginario político se asocian ambas ideas.

Durante ese gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada fue el Ministro reconocido como el autor intelectual de las reformas y de la NPE que sienta las bases para la adopción de un nuevo discurso, una nueva cultura basada en una lógica individualista y competitiva, disolución de identidades colectivas y atomización del movimiento popular. ¿Cuáles las acciones desde el Estado?, la política fiscal fue enfocada en el incremento de las recaudaciones, reducción al gasto del gobierno -despidos masivos, cierre de varias minas y despido de 23.000 mineros y de otros empleados públicos-, reducción de la inversión social, y eliminación de las empresas públicas con el incremento del desempleo. El objetivo central era aproximarse al déficit fiscal cero, para lo que se procedió al congelamiento de salarios a niveles nominales, se congeló temporalmente la inversión pública y se impuso la obediencia estricta al presupuesto. Se elevó el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo y se exigió el pago de impuestos atrasados. Esa fue la marca del modelo neoliberal y desde entonces, la comunidad política boliviana asocia democracia con neoliberalismo, por lo que cada vez que se cuestiona el modelo neoliberal se desgasta la legitimidad de la propia democracia.

Mas adelante, y ya en su primer gobierno constitucional (1993-1997) Gonzalo Sánchez de Lozada llevó adelante las reformas de segunda generación (3) que fueron respuesta a demandas sociales postergadas por más de una década. La descentralización administrativa y la municipalización del país institucionalizaron nuevos mecanismos de participación ciudadana y de redistribución más equitativa de los recursos públicos hacia las zonas más

vulnerables del país a través de los gobiernos locales, medidas que contribuyeron a generar apoyo de la sociedad al sistema político y a contener el descontento social ante la ausencia de resultados de reactivación económica.

En este mismo periodo se aprobó la reforma constitucional -1995- que reconoció la pluriculturalidad, se promulgaron las leyes de Participación Popular (LPP 1551) que redistribuye ingresos hacia los gobiernos locales, de Reforma Educativa (LRE 1565), de Descentralización Administrativa (LDA 1654), y diversas Leyes sociales como las de Seguridad Social Materno-infantil y el Seguro de Vejez, se introdujeron nuevas organizaciones como las Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, los representantes Uninominales, el Consejo de la Judicatura y otros que permiten iniciar la transparentación de la gestión pública; pero también se promulgaron las Leyes de Capitalización y de Pensiones: la primera, una forma particular de privatización que pasa el 51% de las acciones de la propiedad de las empresas públicas a nombre de “los bolivianos” de manera simbólica y sin la mediación estatal –por lo que el Estado no puede tomar decisiones sobre el uso de esas acciones- y el otro 49% a empresas privadas nacionales o extranjeras; y la segunda con fuerte incidencia sobre el déficit fiscal.

4. Los factores que aceleran la generación de la crisis: la gestión de Hugo Banzer.

A partir del gobierno constitucional de Hugo Bánzer Suarez (4), alianza entre ADN, MIR y cinco partidos más por lo que se denominó la Mega Coalición -1997 a 2002-, se produjo la captura del gobierno de los dos tercios de votos en el Congreso, cuyo efecto fue la casi total anulación de su función de fiscalización sobre el gobierno, por lo que hubo mayor ineficiencia en el uso de los recursos públicos, incremento en los casos de corrupción e impunidad de las autoridades. La Mega coalición frenó el proceso de descentralización y enfrentó dos severas crisis políticas en abril y en septiembre del 2000 -que se constituyen en una alerta temprana de los acontecimientos de octubre-, pero que no fueron concientizadas por el sistema político. Durante las crisis del año 2000, uno de los principales factores que generó conflictividad fue el recurso agua, campesinos y sectores populares urbanos del departamento de Cochabamba, además de indígenas de la zona del Lago Titicaca llevaron adelante diversas movilizaciones y

enfrentamientos con el gobierno defendiendo el uso de dicho recurso natural. La demanda central era la recuperación de manos privadas de la administración del agua, por lo que el proceso se denominó también “la Guerra del Agua” y la principal organización de los sectores en conflicto se denominó “la Coordinadora del Agua”, estableciéndose así un factor común a la crisis de octubre con la conformación de un ente articulador denominado la “Coordinadora del Gas”, durante la “Guerra del Gas”.

Este gobierno, también contribuyó a difundir una representación de *neoliberalismo* que entró en contradicción con la cultura política boliviana al darle gran importancia a la orientación presentada por el BM -el Marco Integral de Desarrollo- que establece una detallada metodología de consultas con la sociedad civil para validar y legitimar las políticas públicas, dando lugar al surgimiento de una inflación de expectativas de participación en las organizaciones sociales, las que supusieron que las consultas y las determinaciones adoptadas en ellas, tenían carácter vinculante. Dicho de otro modo, aquellos “Diálogos Nacionales” con representantes de las organizaciones sociales eran una remembranza de la participación política bajo el paraguas del nacionalismo revolucionario.

Este “Marco” cuenta con once instrumentos (5) cuyas bases son la disciplina fiscal y la educación, pero que también otorga responsabilidad a los países industrializados en la reducción de la pobreza en el mundo en desarrollo, lineamientos que en su mayoría fueron incorporados en la agenda de gobierno de la Mega coalición en un plan denominado “Plan Dignidad” que introdujo la realización regular de los “Diálogos Nacionales” y que incluía cuatro pilares: 1) la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza; 2) las políticas de erradicación “Coca 0”; 3) la lucha contra la corrupción; y 4) el Programa de Reforma Institucional para transparentar la gestión pública.

La “lucha contra la pobreza” también generó algunas resistencias sociales ya que diversos sectores se negaban a ser representados como “pobres” y consideraban que todas esas acciones fueron un pretexto de los actores internacionales para apropiarse de los recursos naturales en su propio beneficio.

5. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El segundo gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inició el 6 de agosto de 2002 en un entorno de severa crisis económica y con una baja legitimidad política (6). La coalición se estableció entre cinco de los ocho partidos con representación congresal y enfrentó una crisis de imagen y credibilidad desde su origen debido a que las negociaciones para el establecimiento de la alianza tuvieron predominio de intereses particulares y no de propuestas de políticas públicas. El gobierno nació sin hegemonía ni coordinación interna, abandonando el proceso de municipalización y descentralización, con una actuación oportunista de los aliados y pugnas por cuotas de poder, factores que llevaron a la gestión hacia una alta ineficiencia y un decreciente consenso social.

En ese contexto político, el escenario puede resumirse en crisis del sistema de representación política; crisis del régimen político con pérdida de legitimidad; y crisis del sistema de valores y creencias o de la cultura política (Fundación Milenio, 2003: 2). La primera crisis política seria se presentó en el mes de febrero de 2003 cuando se hicieron evidentes diversas falencias: la fragmentación de la coalición y el predominio de intereses particulares a la hora de tomar decisiones; la indiferencia del sistema de partidos ante la pérdida de confianza de la sociedad; y por último; la ineficiencia en la gestión pública. Las principales políticas públicas de este gobierno fueron: la política antidrogas que no logró reducir efectivamente la superficie de cultivos de coca excedentaria; la política de hidrocarburos que se concentró en la renegociación de contratos con Brasil y la búsqueda de nuevos compradores antes de ser legitimada por la sociedad; y las políticas sociales (Seguro Universal Materno Infantil y Bonosol para la tercera edad) que recibieron múltiples cuestionamientos debido a las limitadas condiciones operativas para su funcionamiento y sostenibilidad. Estos factores también contribuyen a la generación de la crisis.

La visión individualista, utilitaria y pragmática del neoliberalismo también ha tenido su impacto sobre la comunidad política, de modo que las organizaciones sociales se han atomizado y ninguna de ellas tiene capacidad hegemónica, pero a pesar de ello, en octubre todos los sectores populares se articulan bajo una sola consigna: “No a la venta del gas”. A esto se añaden los índices de pobreza que producen una enorme frustración de que los

beneficios se concentren en unas pocas manos –como sucedió históricamente con los recursos provenientes de la minería-, y la suma de todos estos componentes confluye en la reacción violenta e incontenible de algunos sectores en octubre.

II. Los sucesos de octubre: “no a la venta del gas”.

Bolivia es una de las tres principales potencias gasíferas de América, contando con una existencia aproximada de 54,9 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural. Las organizaciones populares presentan demandas de industrialización de dicho recurso estratégico previa a cualquier exportación. El gas puede generar importantes ingresos y puestos de trabajo mediante la producción de fertilizantes, plásticos, hierro, acero, e incluso la instalación de plantas termoeléctricas. La política adoptada por Sánchez de Lozada fue la de vender el gas licuado al mercado externo –Estados Unidos específicamente-, sin ningún valor agregado. El mismo se entregaría vía gasoducto atravesando Chile, quien paradójicamente excluyera a Bolivia de su única salida al mar durante la injusta guerra de 1879. Semejante despropósito desencadenó la ira de la opinión pública y las organizaciones sociales que surgieron en el periodo del nacionalismo revolucionario: central obrera y sindicatos campesinos.

Los acontecimientos de octubre pueden analizarse a partir de diversos factores: las diferentes visiones sobre el rol del Estado en cuanto a los recursos naturales, las diferentes concepciones sobre democracia, la asociación del régimen político con el modelo neoliberal, los desaciertos de la gestión gubernamental, un Parlamento indolente ante los procesos sociales, económicos y políticos del país, un sistema de partidos que perdió conciencia de sus funciones, organizaciones sociales que no han superado la fase corporativa para lograr la fase hegemónica y un proceso de *ciudadanización* inconcluso en una sociedad que espera todo del Estado aunque desconfía de todo lo que venga de él.

Para explicar el origen de la crisis se puede establecer una relación directa con las transformaciones políticas y económicas que se inician en 1985 con el D.S. 21060 y se complementan con procesos como la capitalización de las empresas en 1995. El desempleo, el

retroceso en la legislación laboral, la competencia en un contexto internacional sin condiciones de competitividad, el cierre de empresas, el funcionamiento parcial de otras, la inseguridad y la creciente pobreza, son componentes del imaginario político asociados con el neoliberalismo.

La crisis se inicia en septiembre y concluye el 18 de octubre con la posesión del Vicepresidente Carlos Mesa como Presidente Constitucional de la República. Los primeros días de septiembre el MNR declaraba que la decisión final sobre la venta del gas era decisión de gobierno y en el Congreso se frenaba la designación de 50 autoridades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, lo que prácticamente paralizaba la gestión pública. Mientras tanto, indígenas del Lago Titicaca en el Departamento de La Paz exigían auditorías a los gobiernos locales de la provincia y la liberación de un dirigente campesino –Edwin Huampo– que había sido acusado de asesinato durante la gestión de Hugo Banzer. Fue entonces que se iniciaron los primeros enfrentamientos con costo de 6 vidas, 22 heridos, 7 desaparecidos y 21 detenidos.

A raíz de la represión, el conflicto se extendió rápidamente y en pocos días diversos sectores se habían incorporado con pliegos petitorios de incontables puntos y una negativa casi generalizada a la venta del gas, como estrategia para presionar a un gobierno que se asociaba con las reformas neoliberales -MNR, MIR, ADN eran parte de la alianza-, a un Presidente considerado el autor intelectual de dichas reformas -Gonzalo Sánchez de Lozada y la NPE-, y a un partido en cuyas gestiones de 1985 y 1993 se llevaron adelante las mismas -el MNR-. Se organizó la “Coordinadora del Gas” para coordinar movilizaciones entre los sectores en conflicto. Mientras tanto, el sistema de partidos políticos con presencia congresal se encontraba más preocupado por la distribución de espacios de poder, que por contribuir a la gobernabilidad y estabilidad política necesarias para salir de la crisis económica y política.

A inicios del mes de octubre el gobierno intentó mostrar voluntad política de atención a los problemas sociales y presentó una propuesta para los siguientes tres meses, mientras el Congreso nombraba a un Defensor del Pueblo sin legitimidad y en un proceso con diversas irregularidades que fueron de conocimiento público. Dos días después el gobierno iniciaba con las Fuerzas Armadas un proceso de consulta respecto a la exportación del gas, para

continuar luego con los cinco departamentos más proclives a la exportación, ambas acciones no contaban con ningún apoyo social y contribuyeron a profundizar la crisis política.

El 8 de octubre se inició una huelga general indefinida con cierre de vías en la ciudad de El Alto de La Paz bajo la dirección de la Central Obrera Regional. La deteriorada imagen del sistema político se concentró en la figura presidencial en un contexto ideológico caudillista y personalista, y cualquier cambio en la orientación de la gestión ya parecía demasiado tardío. La Paz -sede de gobierno- se encontraba desabastecida de alimentos y al borde de la hambruna, sin gasolina y con temor por los sucesos en la ciudad de El Alto que parecía un campo de batalla con 26 muertos y 67 heridos –la mayoría de bala- sólo en el primer día de enfrentamientos.

En lugar de comprender la magnitud de la crisis de confianza en las instituciones establecidas, el gobierno responsabilizó al líder cocalero Evo Morales y a su partido -el Movimiento al Socialismo, MAS- por los acontecimientos, sin percibir que las acciones de las diferentes organizaciones sociales no tenían un eje de articulación hegemónica. Para el 14 de octubre el Presidente estaba dispuesto a ceder posiciones respecto al gas y a la consulta popular. Con diversos sectores en conflicto en seis de los nueve departamentos, la demanda central de “no a la venta del gas” terminó convirtiéndose en una solicitud de renuncia del presidente después de un nuevo enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y mineros, y con 46 huelgas de hambre en distintas parroquias alrededor del país y en el exterior exigiendo la renuncia. El 16 de octubre el Presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a su investidura y se trasladó a Miami junto a sus más cercanos colaboradores.

La vinculación de la imagen del presidente con los Estados Unidos, con la capitalización, con lo extranjero, con los organismos internacionales, con la deuda externa, con el neoliberalismo, agotó su capacidad de interpelación. El MNR pasó de ser el partido que construyó el Estado-nación en 1952, al partido de la anti-nación y del “gringo vende patria”, como es denominado Sánchez de Lozada por los sectores populares, por su dificultad de hablar sin acento inglés el castellano y por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

En el momento actual y para lograr algún grado de estabilidad política, el gobierno de Carlos Mesa que fue posesionado el 18 de octubre, se encuentra institucionalizando nuevos mecanismos de participación política que surgen como consecuencia de las demandas de la crisis de octubre: referéndum vinculante sobre el gas y asamblea constituyente. Ninguna de estas medidas -aún cuando se lleven a cabo exitosamente-, garantizan la estabilidad política, ya que cómo aquí se argumenta, existen diferentes representaciones sociales en el escenario político, tanto sobre el Estado, como también sobre el uso de los recursos naturales y sobre la participación, de modo que posiblemente el resultado será cuestionado por algunos sectores de todas maneras.

III. Las representaciones de “neoliberalismo” y la defensa de los recursos naturales en la crisis de octubre.

El esencial rol que adoptaron los pueblos indígenas para el desencadenamiento de los hechos de octubre quedó claramente plasmado en los conceptos vertidos en un manifiesto que realizaron desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el oriente del país:

“Las organizaciones indígenas, campesinas, originarias y de colonizadores del Bloque Oriente, amazónico y de tierras altas de Bolivia, considerando que desde el gobierno no hay soluciones sino balas, resolvemos levantar el cuarto intermedio declarado al finalizar la IV Marcha y nos declaramos en estado de movilización permanente. A raíz de la profunda crisis que atraviesa el país, donde las contradicciones estructurales y la exclusión social han aflorado esta vez con demandas nacionales centradas en la defensa de los recursos naturales, y considerando la situación de violencia desmedida y represión que estamos viviendo las mayorías nacionales, las organizaciones indígenas y campesinas nos hemos reunido en Santa Cruz, y decidimos ratificar nuestra unidad en estas horas de luto.” (10 de Octubre, 2003. Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC); Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ); Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB "BS"); Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB); Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CMIG-Ascención); Consejo de Pueblos Indígenas Yuracaré-

Mojeño (CPIYSC); Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB); Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secura (TIPNIS); Central Indígena Chiquitana Germán Busch (CICHGB); Central Interétnica Ascención (CIEA).

Las demandas iniciales de los sectores sociales eran diversas y dispersas y luego todas confluyen en la negativa a aceptar la venta del gas por Chile y a los Estados Unidos, más adelante embanderan la demanda de recuperación del gas para los bolivianos y terminan exigiendo la renuncia del presidente. Todas estas variables tienen un eje articulador que tiene relación con la recuperación del rol del Estado que fue debilitado a partir de las reformas neoliberales llevadas a cabo desde el sistema político con la influencia de los organismos internacionales, y de la defensa de los recursos naturales. La “Guerra del Gas” puede ser interpretada como un intento de recomposición de la sociedad para recuperar el Estado, ese Estado que gradualmente se achica, que regula y norma, pero que ya no cumple con la función de cohesión de la sociedad ni de realización de las metas colectivas.

Desde las crisis políticas de abril y septiembre del año 2000 y durante los meses de septiembre y octubre de 2003, fueron tres las organizaciones políticas que cobran centralidad y se fortalecen gradualmente:

- El Movimiento al Socialismo (MAS) y su principal representante Evo Morales, quién además de ser diputado nacional es Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores del Chapare y líder principal del movimiento cocalero de la zona del Chapare boliviano en el Departamento de Cochabamba. Los “cocaleros” del Chapare tienen su origen en el proceso de despidos masivos en 1985 con las reformas de primera generación. A los 23.000 mineros despedidos se les dio el nombre de “relocalizados”, es decir, que inicialmente el gobierno de Víctor Paz Estensoro se comprometió a “localizarles” nuevos puestos de trabajo, y al no poder cumplir dicho compromiso, más bien promovió el traslado de mineros y la colonización de otras zonas del territorio nacional para promover el trabajo productivo. Algunos de esos mineros se hicieron productores de la hoja de coca, la cuál mantiene un consumo denominado “tradicional” sobre todo entre la población indígena de la zona andina del continente, en particular en

Bolivia y Perú. De este sector de amplia experiencia sindical surge el movimiento cocalero.

- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su principal representante Felipe “Mallku” Quispe, quien además de haber sido diputado uninominal hasta junio de 2004 cuando renunció a su curul es Jefe Nacional del Movimiento Indígena Pachacuti. El sindicalismo campesino también ha tenido relaciones directas con los orígenes del proceso revolucionario de 1952 desde la Guerra del Chaco - 1935-, a partir de la cual se fundan los primeros sindicatos. La vinculación directa con los acontecimientos del 52 se establece a partir de la Reforma Agraria y posteriormente debido al pacto militar campesino de 1964. La CSUTCB se fundó el 26 de junio de 1979 en un congreso de unidad convocado por la COB y en ella están representadas todas las federaciones sindicales agrarias del país (Qhana, 1987).
- La Central Obrera Boliviana (COB) y su Secretario Ejecutivo Jaime Solares. La COB nació a partir del impacto de la revolución nacional de 1952 y en directa relación con ella. Se funda el 16 de abril de 1952, una semana después de la insurrección popular del 9 de abril que marca el triunfo del proceso revolucionario. Surge de una asamblea y sus principales componentes fueron los sectores minero, fabril, ferroviario, bancario y gráfico. El segundo documento de la COB –el primero es el voto resolutivo que ratifica a Juan Lechín como Secretario Ejecutivo-, presenta sus orientaciones globales, donde el primer factor es la nacionalización de las minas, ferrocarriles y la revolución agraria, y donde además se señala la importancia de mantener la independencia política nacional e internacional. (Lazarte, 1988: 5- 7). El movimiento obrero fue el principal actor social que acompañó al MNR en el proceso revolucionario y la COB fue el principal instrumento de mediación política hasta 1985 cuando empieza a cobrar centralidad del sistema de partidos políticos.

Estas tres organizaciones políticas se constituyen en los principales actores en conflicto desde el movimiento popular en octubre, es por esta razón que se seleccionan sus emisiones discursivas para esta investigación y se analizan las representaciones de neoliberalismo y de los recursos naturales en sus discursos, a través de los documentos que emiten durante el proceso y algunas entrevistas posteriores que permiten aproximarse a su pensamiento político. Veamos pues, las representaciones de *neoliberalismo* en los discursos de sus dirigentes -Morales, Quispe y Solares-, que se constituyen en articuladores de la oposición al modelo neoliberal institucionalizado durante el proceso democrático boliviano y que en la lucha política buscan establecer la hegemonía de su discurso político.

Pero, ¿cuál es el campo de la lucha discursiva por la hegemonía de la sociedad?. Esta lucha se desenvuelve en el campo de la política, en ella los diferentes sectores sociales se enfrentan con el propósito de convertir sus proyectos y sus discursos en hegemónicos, en la política están en disputa los mecanismos y las instituciones que permiten distinguir los enunciados verdaderos de los falsos, la política genera el reconocimiento mutuo entre los individuos, se aceptan y se estimulan ciertas identidades, se alteran y resignifican otras, se estigmatizan las no deseables (Landi, 1981: 173-174). Podemos concebir a la política como práctica articuladora (Laclau, 1985: 26), y debemos recordar que el campo político está constituido por una pluralidad de discursos y posiciones de enunciación que pretenden constituirse en hegemónicas. Todo esto supone que el terreno de constitución de la hegemonía es el discurso, porque toda práctica social se constituye como práctica significativa. (Laclau-Mouffe, 1987: 157).

Todo discurso puede ser analizado e interpretado como vehículo de determinadas significaciones (de Ipola, 1979: 177), y lo que otorga unidad interna específica a una formación discursiva es el sistema de interpelaciones que contiene: las maneras en que son nombrados los destinatarios de los discursos (Landi, 1981: 186). La interpelación sería un proceso que se genera en un discurso y está dirigido a constituir una determinada identidad individual o colectiva, lo cual se logra en tanto los individuos se reconozcan en ese discurso, y esas interpelaciones por heterogéneas que parezcan, son la manifestación de un discurso ideológico provisto de una cierta unidad, por la capacidad de cada interpelación aislada de jugar un papel de condensación con respecto a las otras.

En este trabajo entiendo el discurso como una emisión consciente de significaciones articuladas por un sujeto individual o colectivo, con el objeto expreso de decir o de comunicar algo (Tapia, 1988: 56), y además, el discurso es entendido como el lugar de una lucha específica por el poder, estudiar lo discursivo es estudiar reglas y relaciones de poder. (Barbero, 1979: 27).

Ahora bien, para analizar un discurso hay que situarlo en el contexto de interdiscursividad en que se ubica, el análisis de discurso político consiste en analizar como tales textos producidos por líderes o miembros de alguna institución relacionada con el Estado o sistema político específicamente. Por tanto, para definir el objeto (discurso político), hacemos intervenir las instituciones políticas (partidos políticos, sindicatos, etc.), el concepto de lo político califica dos instancias diferentes: discursos/instituciones.

El discurso político es pues, por excelencia, un vehículo de significación ideológica y en este trabajo es entendido como el discurso de un intelectual colectivo en busca de su hegemonía. Se puede considerar un discurso como la obra de unos individuos pertenecientes a un grupo, como el discurso de todo el grupo, es así que éste se vuelve un locutor-intelectual-colectivo que no existe sino en la medida en que existe el discurso colectivo (Marcellesi, 1980: 96). Aunque el discurso sea considerado como la obra de un locutor-intelectual-colectivo, no puede ser emitido por el grupo sino por un enunciador (o emisor) a nombre de dicho grupo. Dicho de otro modo, el acto mismo de la enunciación está dado por un individuo. En este caso, considero los discursos de Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Gonzalo Sánchez de Lozada, como representativos de sus organizaciones políticas.

1. Evo Morales Ayma.

La propuesta política de Evo Morales articula reivindicaciones étnicas y clasistas en torno a las ideas de colonialismo y antiimperialismo. Es el principal dirigente de la zona de mayor producción de hoja de coca en Bolivia. Es diputado nacional hace dos gestiones consecutivas y también es Jefe Nacional del partido político denominado Movimiento al Socialismo

(MAS), que obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002 con un 20,96% de los votos frente a un 22,46% del ganador MNR.

Morales adquiere un rol fundamental en la política interna a partir de las crisis de abril y septiembre del año 2000 durante el gobierno del ya fallecido Hugo Banzer, quien en la búsqueda de mayor volumen de recursos de apoyo de la comunidad internacional estableció con el gobierno de Estados Unidos el acuerdo de erradicar en un 100% la producción de la coca ilegal (7). A partir de entonces el movimiento cocalero y el MAS mantienen un rol central como oposición y en defensa de la producción de la coca para consumo tradicional.

El principio articulador del discurso de Evo Morales gira en torno a las ideas de imperialismo y neoliberalismo. La recurrencia temática permanente a ambas ideas se refuerza con otros elementos como: capitalismo, globalización y colonialismo.

“El neoliberalismo es la reproducción del capitalismo salvaje e inhumano que sigue permitiendo la concentración del capital en pocas manos, que no da solución a las mayorías en todo el mundo. Por eso la lucha es contra la globalización en todo el mundo. En el caso boliviano, después del fracaso del capitalismo de Estado y del actual fracaso del neoliberalismo, esta vez les tocas a los pueblos, a las empresas autogestionarias, colectivas”. (Morales, 2002).

Los principales adversarios que pueden detectarse en las emisiones discursivas son: las empresas transnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y Gonzalo Sánchez de Lozada en tanto representante del neoliberalismo:

“Yo decía, para echar a Gonzalo Sanchez de Lozada como presidente, se juntaron un conjunto de cosas: la resistencia por más de 500 años contra el colonialismo interno, porque Sanchez de Lozada representa definitivamente a un modelo económico. Y hemos derrocado al símbolo del neoliberalismo. [...]. La tarea está orientada fundamentalmente a recuperar el poder político. Después de más de 500 años de sometimiento, de esclavitud, de marginamiento, de odio, los fidependidos nos

organizamos para recuperar el poder político. Y una vez recuperado el poder político, recuperar el territorio, ¿qué significa?, recuperar todos los recursos naturales renovables y no renovables. [...]. Segundo, después de semejante masacre nos han unido a todos los sectores Fuera Gonzalo Sanchez de Lozada, claro llegó la hora también al acabar con el presidente que representa los intereses de las transnacionales, porque hablar con Sanchez de Lozada era hablar con un representante de las transnacionales y no con el representante de los bolivianos, no porque es socio, sino por ser parte de la política de concentrar las riquezas en pocas manos”. (Morales, 2003b.)

La caracterización del neoliberalismo que hace Morales en su discurso se vincula a la explotación y apropiación de los recursos naturales por las transnacionales:

“Nosotros somos una oposición al modelo, un modelo de hambre y miseria. El pueblo boliviano está cansado de este capitalismo salvaje, yo sigo convencido que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad, es el peor enemigo del medio ambiente, del planeta tierra. [...]. la única alternativa que nos queda es buscar la unidad y la integración. Mayor organización para ir en defensa de nuestros pueblos, de nuestras riquezas, de nuestras empresas, y si no se produce esta unidad, vamos a seguir soportando la intromisión militar y económica de Estados Unidos. Ahora que quieren aprobar y aplicar el ALCA, para los pueblos el ALCA es sólo un acuerdo para legalizar la colonización de las Américas, es un acuerdo de "libre ganancia para la América del Norte". Son instrumentos de sometimiento, porque colapsará el pequeño agricultor trayendo hambre y miseria” (Morales, 2003 a).

El discurso político de Evo Morales articula las ideas de venta del gas, pérdida de recursos naturales, colonialismo y sometimiento, y luego las contrapone a la articulación discursiva de: Gonzalo Sánchez de Lozada, neoliberalismo, capitalismo, imperialismo, empresas transnacionales, gobierno de los Estados Unidos.

2. Felipe “Mallku” Quispe.

Felipe Quispe fue miembro activo del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) con una postura marxista-maoista radical que asienta la estrategia de acción política en la insurrección popular y la lucha armada, razón por la que estuvo varios años preso acusado de terrorismo después de participar en la organización de un atentado a una torre de electricidad que explotó con una bomba. Su pensamiento indianista tiene un alto contenido de racismo hacia los "Q'aras" (8) y plantea el retorno al Ayllu, a las formas de producción pre-incaicas y a la creación de un Estado propio en su territorio originario. Quispe ha afirmado públicamente y en diversas oportunidades que desconoce al Estado boliviano y busca la constitución de un Estado indio. Hasta junio de 2003 fue diputado nacional uninominal y luego renunció al curul para continuar su lucha desde “fuera del sistema dominante”. Es Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Jefe Nacional del partido indianista denominado Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). Cobra centralidad en la lucha política a partir de las crisis del 2000 con una estrategia de bloqueo y cerco a la sede de gobierno similar a la utilizada por el líder aymara Tupac Katari en la rebelión indígena de 1780-1 durante la colonia española.

Quispe emite un discurso de reivindicaciones étnicas que visibiliza la discriminación y exclusión de la población indígena en el proceso de construcción de la nación boliviana, pero la principal limitación del discurso es la ausencia de capacidad hegemónica debido a su confrontación permanente con la población mestiza boliviana, caracterizándola como adversario político en base a diferencias fenotípicas, no políticas ni ideológicas.

“En primer lugar, el gas sale de territorio indígena y, en segundo, queremos que se anule la Ley de Hidrocarburos, que favorece a las petroleras trasnacionales. Junto a otras empresas estatales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) fue privatizada por este gobierno con muchas promesas que nunca se cumplieron. Pero ahora la gente de todo el país se ha dado cuenta de que el proyecto de exportación de gas del gobierno es un engaño. No queremos que se exporte el gas natural, que perfectamente se puede industrializar en Bolivia. Y venderlo al país que queramos, pero no a Estados Unidos, que hoy ocupa Irak y mañana puede hacer lo mismo en Bolivia”. (Quispe, 2003 a).

El discurso de Quispe permite enfatizar la representación respecto a la propiedad de los recursos naturales, y la asociación de esa idea con las transnacionales y con los Estados Unidos, caracterizado como el principal adversario político, junto a Gonzalo Sánchez de Lozada:

"Ese gas sale del territorio indígena, es de nosotros. Pero jurídicamente hay una ley de Hidrocarburos, hay un decreto, pero, nosotros lo podemos industrializar y vender a otros países. A los que queramos y no venderlo como materia prima a los gringos de Norteamérica. Sabemos bien que los gringos van a invadir a otros países, van a aniquilar vidas humanas como lo están haciendo en Irak, mañana podría ser Colombia, porque ya tienen un Plan Colombia, o Venezuela, y hasta el mismo Ecuador. Antes eran los partidos comunistas los enemigos acérrimos de los gringos, ahora somos los indios. Por eso no queremos vender a los gringos, es por eso que nos hemos opuesto y movilizado. Finalmente hemos llegado a este gran movimiento y ahora estamos planteando la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada, porque este carnicero debe irse de este país". (Quispe, 2003 b).

El Manifiesto de la CSUTCB denominado Aruskipasipxañani, en febrero de 2002 señalaba lo siguiente:

- Administración autónoma, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables del suelo y subsuelo existentes en los territorios indígenas originarios, por los Ayllus, Markas y Suyus.
- Exige el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, su aplicación a empresas privadas a través de mecanismos legales para que las autoridades competentes actúen con celeridad a sola denuncia de los damnificados.
- Abrogatoria del Código de Minería por atentatoria a los derechos de los pueblos indígenas.
- Participación en las políticas y negociaciones de exportación de gas, como el que está procediendo con la exportación a los Estados Unidos y México". (Aruskipasipxañani, 2002).

El discurso político de Quispe y de su organización muestra la centralidad que aún existe en el imaginario político la idea del rol del Estado administrador de los recursos naturales. La representación de la venta del gas se articula con intereses transnacionales y con los Estados Unidos, con el cuál se vincula a Gonzalo Sánchez de Lozada.

3. Jaime Solares

Jaime Solares es dirigente obrero y actualmente Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Militante del Partido Obrero Revolucionario Unificado de la Cuarta Internacional. Durante los días de la crisis fue miembro de la “Coordinadora del Gas” y si bien no es un dirigente con una trayectoria histórica de alto perfil entre las organizaciones afiliadas a la COB, lleva adelante el intento de recuperar espacios de intermediación política de la sociedad y hacia el sistema político. La COB se constituyó en el principal mecanismo de mediación política –incluso por encima del sistema de partidos- desde la revolución nacional, durante los gobiernos dictatoriales y hasta la “relocalización” en 1985, dado que su vanguardia minera se vio seriamente afectada con las reformas neoliberales y la liberalización laboral, lo que debilitó a la organización entera.

Desde entonces la central obrera se encuentra fragmentada, debilitada y ha perdido la fundamental presencia indígena que hoy se articula alrededor de la CSUTCB, por lo cual, la búsqueda de constituirse en articulador de demandas en octubre no era simplemente una opción circunstancial, sino una estrategia política con diversos e infructuosos intentos previos, de reposicionarse en el escenario político y recuperar legitimidad.

El discurso político de la COB se refiere al *neoliberalismo* como: el mecanismo para la consolidación del dominio imperialista en el continente; una imposición merced a la dependencia de los países latinoamericanos y al servilismo de nuestros gobiernos; los ajustes estructurales liberalizan los mercados en perjuicio de la producción nacional favoreciendo a las transnacionales; posibilita la privatización de las empresas estratégicas; es una nueva forma de imposición de los organismos financieros internacionales como FMI, BID, BM y

beneficia a las transnacionales. Algunos artículos del Programa de la COB señalan lo siguiente:

“1.- Los bolivianos somos quienes debemos decidir sobre el gas, porque en nosotros reside la soberanía y dignidad [...], recuperar el gas es un deber patriótico y revolucionario. Por esto es importante y prioritario luchar por la abrogación de la Ley de Hidrocarburos y el D.S. 24806”.

2.- [...] con los ajustes estructurales, liberalizan los mercados en perjuicio de la producción nacional favoreciendo las transnacionales. Por eso no pódenlos ignorar [...] los acuerdos bilaterales, que en conjunto someten a nuestras débiles economías imponiéndonos el consumo de productos transgénicos.

3.- Abrogación del D.S. 21060, donde está incluido el art, 55 de la libre contratación.

10.- Reversión al Estado de las empresas estratégicas privatizadas.

11.- No permitir que el recurso natural agua, sea-entregado a consorcios privados para su lucro y al contrario exigimos que este líquido elemental para las familias y la producción agropecuaria, debe tener la protección del Estado y las propias organizaciones sociales del pueblo, como las juntas vecinales, los regantes y la sociedad en su conjunto.

16.- Rechazo rotundo al impuestazo, *gasolinazo*, *garrafazo*, *facturazo* y otras formas de reaccionar dineros de los sueldos y salarios de los obreros, que constituye una nueva forma de imposición de los organismos financieros internacionales, como el FMI, BID, BM y otras que buscan garantizarse el pago de la deuda externa, además solventar el pago de sobresueldos(plus) y gastos reservados del Estado”.
(COB, 2003).

Se puede observar que los principales adversarios que se definen en este discurso político son los grandes organismos de cooperación internacional -FMI, BID y BM-, las empresas transnacionales y los “gobiernos serviles”, y al mismo tiempo, todos estos actores son asociados con las reformas neoliberales y el D.S. 21060 de manera directa.

“Para nosotros el mejor plan de conciliación puede ser de que él abrogue la ley de hidrocarburos esto afecta a los intereses del país porque ésta ley esta entregando en boca de todos a las grandes transnacionales a un precio baratísimo y en lugar de esto no lo podemos permitir como bolivianos, cualquier gobierno esta en el deber de poder defender sus recursos naturales y que si este hay que disponerlo a la venta al exterior pero siempre debe ser con una gran remuneración para que esto favorezca los intereses nacionales de cada país. Aquí no se trata de eso, Sánchez de Lozada parece que ya tiene todo comprometido para que el gas salga por Chile, y eso va a significar su caída, porque el pueblo no lo quiere más ya nada a Sánchez de Lozada ni conciliación, ni concertación, ni nada, porque desde 1985 nos habla de conciliaciones, de concertaciones, pero a la fecha el pueblo no ha recibido nada, mas vista política, no hecho otra cosa que traer mas hambre, mas miseria, mas desocupación y los únicos que han salido gananciados de esta política son los corruptos del gobierno a la cabeza de Sánchez de Lozada. (Solares, 2003).

En el fragmento anterior, se puede percibir que el componente simbólico directamente vinculado a la figura del ex Presidente Sánchez de Lozada son las reformas neoliberales de primera generación de 1985.

En general, y más allá del discurso político es a través de múltiples declaraciones de diferentes grupos e individuos, que se puede percibir una coincidencia en ciertas representaciones del imaginario político, un ejemplo de ello son las siguientes:

Braulio	Cachi.	Estudiante	Elías	Marka.	Campesino
“Desde el oro, la plata y el estaño, todas las riquezas se lo han sacado. Ahora nos dicen que es la última vez, que hay que exportar el gas... ¡mamando! Aquí se debe industrializar el gas y no venderlo, para que no quede como			“Estamos bastante renegados con el Goni. Si él quiere plata que se venda a su mujer. Porque el gas es producto natural de Bolivia y para nosotros no hay nada para los campesinos ni para los pueblos. Nosotros		

<p>el Cerro Rico de Potosí que quedó como una mina de huecos. ¿Y nosotros? seguimos siendo pobres. Eso ya no debe pasarnos más.</p>	<p>pedimos desde hoy que no salga nuestro gas ni por el Perú ni por Chile. Este Goni ya nos ha tenido como esclavos suficiente y no aguantamos”.</p>
<p>Nemesio Choque. Vecino de La Paz “Primero, los bolivianos tenemos que recuperar el gas de las manos de las transnacionales. Después, industrializarlo para beneficio de los bolivianos, para beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Hay que buscar financiamiento para industrializar. ¿Cómo vamos a regalar el gas a nuestro enemigo? Porque este Gobierno quiere gas para Chile, y no podemos permitir”.</p>	<p>Esteban Condori. Gremial “El gas debe industrializarse en Bolivia para tener mejores empleos. ¿Hasta cuándo los bolivianos vamos a pedir limosna de todo el mundo? Aquí tenemos que industrializar para que haya más dinero. Porque estos señores que quieren vender se van a ir a Estados Unidos, a Europa a disfrutar de su dinero y nosotros vamos a padecer aquí. Nuestros hijos tienen que tener la plata del gas”.</p>

Fuente: Periódico La Razón. 20 de Septiembre de 2003: “La oposición al proyecto LNG intenta desmarcarse del MAS”.

4. El discurso político del principal partido en función de gobierno.

Si bien durante todo el trabajo se argumenta que tanto el MNR como partido político y Gonzalo Sánchez de Lozada como operador político y Presidente de la República, desde 1985 se han constituido en promotores de las reformas neoliberales, el análisis del discurso político puede contribuir a entender mejor cómo representan el neoliberalismo. El Programa de Gobierno del MNR para las elecciones presidenciales de 2002 denominado el “*Plan de Emergencia. Para salir de la crisis, derrotar la corrupción y combatir la exclusión*”, es un documento central y extenso que permite analizar el rol que le asignan al Estado, o a la importancia del libre mercado. Veamos algunos ejemplos:

“En las actuales circunstancias, el Estado está impelido a ofrecer estímulos que reanimen a nuestra languideciente economía. El impulso estatal debe ir acompañado de

medidas que movilicen el dinero que hoy en día descansa en los bancos, y que lo transformen en crédito para la producción de bienes y servicios. Pero el crédito no se activará si no se introduce, en la norma financiera, las modificaciones imprescindibles para que el mercado de capitales se desarrolle y profundice. Aún más, será necesario poner en marcha un programa que establezca de inmediato condiciones razonables para rehabilitar a las empresas productivas, y que de viabilidad a iniciativas que atraigan capitales de riesgo para fortalecer y desarrollar el potencial productivo hoy inutilizado”. (MNR, 2002: 5)

“También se debe desatar las amarras que frenan el desenvolvimiento de tantos bolivianos que no precisan del Estado para ganar su sustento, pero si de un ambiente favorable para la realización plena de sus capacidades productivas. Es imperativo eliminar las trabas que ha creado el Estado para justificar su existencia, en contraposición a la libertad de los ciudadanos”. (MNR, 2002: 5)

El eje de articulación hegemónica al interior del discurso, claramente gira alrededor del neoliberalismo y de la importancia de las relaciones comerciales con el ámbito externo:

“Para lograr este objetivo [superar la crisis económica], es preciso recuperar el manejo macroeconómico de la nación y enfrentar cada uno de los problemas del país. En un marco de estabilidad de precios y de equilibrio externo sostenible”. [...] Este propósito se realizará consiguiendo una mayor holgura fiscal, fortaleciendo la capacidad del Estado para generar ingresos, optimizando la utilización de la cooperación externa y mejorando la eficiencia del gasto fiscal; también reconstruyendo la estructura del financiamiento externo de largo plazo, a fin de que sea la óptima. (MNR, 2002: 7)

El discurso del MNR o de Gonzalo Sánchez de Lozada es una muestra de la visión sobre democracia liberal representativa, modelo neoliberal o sobre el rol del Estado que es compartida con los grandes partidos políticos que se mantuvieron durante las últimas dos décadas en funciones de gobierno: en 22 años de continuidad democrática: ADN estuvo 14 en

el poder ejecutivo; el MIR estuvo 13 años y el MNR solamente 9, aunque en dos de sus tres gestiones –1985 a 1989 y 1993 a 1997-, se llevaron adelante las reformas de primera y segunda generación. En resumen, esta visión de la orientación de la gestión pública representa la visión que hasta octubre de 2003 era la visión dominante del sistema político dentro del imaginario político boliviano. En este caso es claramente intencional el uso del concepto de dominación y no de hegemonía, ya que precisamente, al no haber podido constituirse en hegemónica, esta visión se ha ido desgastando gradualmente desde 1997, dando lugar al surgimiento del proceso de ingobernabilidad que se estudia en este trabajo.

Algunas conclusiones y comentarios finales.

En Bolivia, después de tres décadas de revolución nacionalista y de construcción de un imaginario político que otorga centralidad a la figura del Estado como factor de cohesión social, se produjo el tránsito hacia un Estado neoliberal que ha dejado de cumplir esas funciones para pasar a ser una instancia reguladora, normativa, facilitadora, y que ha debilitado su función de cohesión social. Pero el entorno ideológico mantiene lógicas *estatólatras* y la comunidad política espera que el Estado siga siendo la instancia fuerte que defiende y garantiza que los beneficios de los recursos naturales sean para el conjunto y que unifique la vida social.

En una sociedad heterogénea que tiene distintas formas de comprender el Estado y sus roles, con distintas concepciones de democracia y con una representación negativa del neoliberalismo, el gobierno de Sánchez de Lozada activó sentimientos adversos en una cultura política con predominio de orientación emotiva. El MNR abandonó su nacionalismo original, y después de siglo y medio de exportar minerales al mercado mundial sin que se hayan mejorado significativamente las condiciones de vida de la mayoría de la población – especialmente de la población indígena-, la comunidad política hizo de la defensa del gas el principal factor de cohesión social.

Durante toda la historia republicana la economía interna se asentó en la exportación de materias primas –principalmente la minería- al mercado externo, y los beneficios no han sido

distribuidos de manera equitativa y eficiente entre el conjunto de la población: el 38% de la riqueza se ha concentrado en el 10% de la población más rica, mientras que el 12% de la riqueza se concentra en el 40% de la población más pobre. Después de los sucesos de octubre queda claro que los sectores en conflicto buscan impedir que con el gas suceda lo que sucedió con la minería.

La actuación de las organizaciones políticas de la sociedad en octubre muestra una política cultural en un imaginario político donde el Estado sigue siendo representado como el factor central de cohesión de la vida social, pero al mismo tiempo es una movilización social y política que promueve el tránsito de una democracia representativa hacia una democracia participativa de lógica asambleísta, de participación directa, y por tanto, al mismo tiempo que fortalece las organizaciones sociales debilita la institucionalidad existente.

La debilidad institucional no sería un problema tan serio, de no ser por la importancia asignada al rol del Estado en el imaginario político y cuando el Estado se debilita se debilita también la cohesión social. En una sociedad pluricultural y fragmentada sin un factor de cohesión legitimado lo que se producen son disociaciones, las demandas de territorios independientes, Estados propios, autonomías regionales, federalismo y de destrucción del Estado y del régimen democrático circulan junto a las demandas de incrementos salariales o de generación de empleo.

El escenario posterior de la crisis de octubre puede resumirse en crisis institucional, y los mecanismos de participación –formales e informales- que empiezan a activarse más allá de los órganos de deliberación del poder legislativo se muestran con predominio de particularismos, sean corporativos, sectoriales o étnicos, pero gradualmente se pierde la visión de totalidad, incluso se debilita la posibilidad de mantener el país tal cual hoy lo conocemos en términos territoriales.

La crisis no se ha superado por completo, hoy el largo plazo son tres meses y esta en manos del actual gobierno asumir la responsabilidad de mirar más allá de los índices e indicadores, de mirar las representaciones sociales que construyen realidades.

Notas

(1) Después de casi veinte años de dictaduras militares entre 1964 y 1982, los gobiernos democráticos fueron los siguientes: Unión Democrática y Popular (UDP) de 1982 a 1985; Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en alianza con Acción Democrática Nacionalista (ADN) de 1985 a 1989; Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en alianza con ADN y Conciencia de Patria (CONDEPA) de 1989 a 1993; MNR en alianza con Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS); ADN en alianza con MIR, UCS, CONDEPA, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Katarismo Nacional Democrático (KND) y Nueva Fuerza Republicana (NFR); MNR en alianza con ADN, MIR, NFR, MBL y UCS. El actual gobierno de Carlos Mesa Gisbert no mantiene alianza con ningún partido político.

(2) Se denominan así a las *recomendaciones* que FMI y BM dictan para América Latina bajo el nombre de “Consenso Washington”: disciplina fiscal, redireccionamiento de las prioridades del gasto público hacia campos que permitan de manera conjunta: alto retorno económico; y la posibilidad de mejorar la distribución de ingresos en áreas como salud, educación e infraestructura; reforma impositiva, reduciendo las tasas y ampliando la base; liberalización de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; liberalización del comercio; liberalización de los flujos de inversión extranjera directa; privatización; desregulación, para eliminar las barreras de entradas y salidas; asegurar los derechos de propiedad.

(3) Se denominan así a las recomendaciones de los organismos multilaterales del de Post Consenso de Washington que incorporan elementos como el medio ambiente, la distribución del ingreso, fortalecimiento de la democracia, la regulación fiscal, políticas que promuevan la competencia, la transferencia tecnológica y la transparencia.

(4) Hugo Banzer Suárez fue presidente de facto desde el golpe de estado de 21 de Agosto de 1971 hasta 1978. Fue la dictadura militar más larga del Siglo XX y se caracterizó por el uso de la violencia, el nepotismo, la ineficiencia, el incremento acelerado de la deuda externa y la proscripción de la actividad político partidaria y sindical en el territorio nacional.

(5) Los once puntos del Marco Integral de Desarrollo propuesto por el Banco Mundial son los siguientes: disciplina fiscal basada en reglas; atemperamiento de los efectos cíclicos de

expansión y de colapso; redes de seguridad social que se activen en forma automática; escuelas también para los pobres; gravar a los ricos y gastar más en el resto; dar oportunidades a las pequeñas empresas; fortalecer los derechos de los trabajadores; luchar francamente contra la discriminación; reparar los mercados de la tierra; servicios públicos orientados al consumidor; reducir el proteccionismo de los países ricos.

(6) Los resultados de las Elecciones Generales de 2002 fueron los siguientes: MNR 22,46%; MAS 20,96%; NFR 20,91%; MIR 16,32%; MIP 6,09%; UCS 5,51%; ADN 3,4%; LyJ 2,72%; PS 0,65%; MCC 0,63% y CONDEPA 0,37%.

(7) En la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008 de 19 de julio de 1988), se contempla una zona legal de producción de hoja de coca para el consumo tradicional. La producción fuera de esa zona es considerada ilegal por lo que se promueven políticas de erradicación y sustitución de cultivos desde el Estado.

(8) El término Q'ara proviene del idioma aymara y significa: desnudo, sin, pelado. En sentido social se lo asocia con "el que no tiene cultura", o "el que no tiene identidad clara". A pesar de una vulgarización de esta acepción asociada a lo "blanco" es decir, en alusión a la diferencia de razas, el movimiento indianista boliviano aplica este término -de manera despectiva- no solo a los blancos (nacionales y extranjeros) sino a los mestizos y cholos. Es decir, que Q'ara es todo aquel que no es Jaqui o Indio Aymara.

Bibliografía.

Aruskipasipxañani (2002): Propuesta de los Ayllu, Markas y Suyus de la República del Qullasuyu. Febrero, La Paz.

Antezana, Luis H. (1983) Sistema y proceso ideológicos en Bolivia en: *Bolivia, Hoy*. René Zavaleta Mercado compilador. Siglo XXI Editores, México, pp.60-84

Barbero, Jesús Martín (1979) *Hacia una Teoría de la Mass-Mediación*. SCIENTIA ET PRAXIS, Agosto, Nro. 14. Lima-Perú.

Blanco, Desiderio (1979) *Comunicación y Sociedad*. SCIENTIA ET PRAXIS, Agosto, Nro. 14, Revista de la Universidad de Lima. Lima.

Calderón F. y Laserna, R. (1994) *Paradojas de la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia*. Fundación Milenio. Serie: Temas de la modernización. La Paz.

Costa, Jimena (2003) *El sentido de "democracia" en la cultura política boliviana. Análisis comparativo entre lógicas de comportamiento político en la democracia liberal y en la democracia aymara*. Publicación del Doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. En edición.

Costa, Jimena (2004) *La crisis de octubre de 2003 en Bolivia*. Análisis de coyuntura política. Fundación Milenio. En imprenta.

de Ipola, Emilio (1979) "Sociedad, Ideología y Comunicación". en A.A.V.V.: *Comunicación y Cultura*. Editorial Nueva Imágen, México.

Fundación Milenio (2003) Informe de Milenio sobre el acontecer político en Bolivia. N° 6. Agosto 2002 – Agosto 2003. OBANDO Grupo Publicitario Internacional. La Paz.

Laclau, Ernesto (1985) "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política". en A.A.V.V.: *Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina*. UNAM, México, 1ra. Edición.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1987) *Más allá de la positividad de lo social: antagonismo y hegemonía*, en *Hegemonía y Estrategia Socialista*. 1ra. Edición, España. Siglo XXI Editores.

Landi, Oscar (1981) "Sobre Lenguajes, Identidades y Ciudadanías Políticas". En A.A.V.V.: *Estado y Política en America Latina*. México. Siglo XXI Editores.

Lazarte, Jorge (1988) *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la COB 1952-1987)*. Editorial Offset Boliviana, EDOBOL.

Mato, Daniel (2001) Des-fetichizar la “globalización”: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores. En D. Mato (comp.) *Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización-2*. Buenos Aires-Caracas: CLACSO-UNESCO.

Mato, Daniel (1996) Procesos culturales y transformaciones socio-políticas en América “Latina” en tiempos de globalización. En D. Mato et.al. (coords) *América Latina en Tiempos de Globalización*. Caracas: UNESCO-ALAS-UCV.

Mato, Daniel (2003): Introducción. En D. Mato (coord) *Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*. Caracas: FACES-UCV. En prensa.

Mato, Daniel (2003) Actores Sociales Transnacionales, Organizaciones Indígenas, Antropólogos y Otros Profesionales en la Producción de Representaciones de "Cultura y Desarrollo". En: Daniel Mato (coord.) *Políticas de Identidades y Diferencias Sociales en Tiempos de Globalización*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. pp.: 331-354

Mato, Daniel (2004) Actores globales, redes transnacionales y actores locales en la producción de representaciones de ideas de sociedad civil. En: Daniel Mato, coord. *Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. págs.: 67-93. disponible: www.globalcult.org.ve.

Movimiento Nacionalista Revolucionario (2002) *Plan de Emergencia. Para salir de la crisis, derrotar la corrupción y combatir la exclusión social*. Separata distribuida con los medios de prensa a nivel nacional. Bolivia.

Morales Ayma, Evo (2002) Entrevista realizada por Pablo Stefanoni. Santiago, 30 de agosto.

Morales Ayma, Evo (2003a) Entrevista realizada por Mauricio Gaete. Agencia Mundo Posible. 10 de abril.

Morales Ayma, Evo (2003b) Entrevista realizada por Andrés López. Centro de Estudios Independientes de la Argentina. Lunes 10 de Noviembre. argentina.indymedia.org.

Qhana Educación Popular (1987) Sindicalismo Campesino, 1977-1987 10 años con los campesinos. Talleres CATEP, La Paz, Bolivia.

Quispe, Felipe (2003a) Entrevista realizada por Rebelión. Arde Bolivia. 14 de octubre.

Quispe, Felipe (2003b) Entrevista realizada por *Altercom*. "Si eligen a Carlos Mesa vamos a seguir siendo sus opositores" Octubre.

Solares, Jaime (2003) Entrevista realizada por Paulina Castro, 2 de octubre. Radio UDG – Guadalajara. México.

Tapia, Luis Fernando (1988) "Las transformaciones de las interpelaciones del M.N.R.", AUTODETERMINACION, Mayo-Julio, Nro. 5, La Paz-Bolivia.